

ARTÍCULO DE OPINIÓN

“Volatilidad y petróleo, la crisis bélica: una lectura desde Dostoievski”



Mg. Ec. Amanda Hidalgo

El Hay un momento en Los hermanos Karamázov en el que uno de los personajes se pregunta si todo lo construido no era, en realidad, apenas una ilusión sostenida por el azar. Algo parecido podría decirse hoy de la arquitectura fiscal del Ecuador, tan ligada al precio de un barril de petróleo que fluctúa con la misma inestabilidad con la que caen los dados en una partida que no controlamos.

Presupuestar a USD 63,7 por barril, como se hizo para 2025, pareciera -en el contexto global de hoy-, un acto de fe más que de un cálculo técnico. La realidad es distinta: el Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta un promedio de USD 57 para este año, y hasta mayo ya se evidenciaba una media inferior, de USD 60,97. Esa diferencia, que a simple vista podría parecer menor, se traduce en una pérdida aproximada de USD 6,7 por barril, lo que implica una disminución anual de más de USD 600 millones si se mantiene el volumen de exportación. Son cifras que erosionan directamente la posibilidad de sostener el gasto público sin recurrir a deuda o recortes.

La tormenta que se cierne sobre el mercado petrolero consecuencia de los movimientos geopolíticos internacionales, tiene dimensiones bastante profundas. Las tensiones entre Irán e Israel, con intercambio de misiles y amenazas sobre el Estrecho de Ormuz (arteria por donde transita cerca del 20 % del crudo global) han elevado el precio del Brent hasta USD 75–78 por barril, con proyecciones que alcanzan incluso los 130 en caso de cierre de esa vía. Ese premium bélico es una llamarada en el horizonte económico internacional: la inflación se recalienta y las decisiones de política monetaria pierden certidumbre. En Ecuador, esta inestabilidad mundial añade una capa extra de fragilidad al modelo fiscal.

Y si el mundo está en guerra en Medio Oriente, Ecuador también libra sus propias batallas. La recaptura de José Adolfo Macías, alias “Fito”, tras 18 meses prófugo, representa sin duda un logro relevante del actual gobierno, que ha ejecutado una acción tangible en medio de un contexto marcado por la retórica en materia de seguridad. No es menor el gesto institucional de recuperar el control sobre una figura emblemática del crimen organizado, en un país aún estremecido por el recuerdo de la crisis carcelaria y la violencia de enero. Sin embargo, como suele ocurrir en contextos frágiles, cada avance en el frente represivo demanda posiblemente un correlato en el frente económico: no hay paz duradera sin inversión social, ni seguridad real sin estabilidad fiscal. La movilización del Estado ante eventuales represalias —legítima y necesaria— debe también hacernos mirar la raíz de los conflictos: la precariedad, el desempleo, la desigualdad. En última instancia, el financiamiento de esta guerra interna también depende del mismo petróleo que hoy amenaza con agotarse.



La historia económica está plagada de países que confundieron bonanza con permanencia. Joseph Stiglitz lo advirtió hace ya tiempo: “Los recursos naturales deben traducirse en instituciones, no en gasto efímero”. El problema no es tener petróleo, sino depender de él como quien confía en una cuerda cortante durante una tempestad.

Chile comprendió a tiempo que su cobre no podía ser la única columna vertebral de su presupuesto. Su Fondo de Estabilización Económica y Social amortigua los golpes de precios sin dismantelar políticas públicas esenciales. Noruega fue más allá y creó un fondo soberano con reglas estrictas, distante de la tentación política. Nigeria, pese a sus dificultades, canalizó excedentes petroleros hacia el desarrollo.

Ecuador, en cambio, ha mantenido una relación lineal: si el precio sube, el gasto crece; si baja, se reduce. Esa lógica termina por minar a los sectores más vulnerables y debilita la continuidad del gasto social. Lo urgente no puede opacar a lo importante. Con la producción petrolera en declive —465 150 barriles diarios en promedio hasta mayo, un descenso del 4,4 % anual según el BCE— y sin nuevas fuentes de financiamiento sostenibles, el margen de maniobra estatal se estrecha. El país enfrenta una tormenta con pocas velas y sin seguros. Solo entre enero y abril de 2025, las exportaciones petroleras generaron USD 2 801 millones, una caída del 19 % frente al mismo periodo de 2024.

Es cierto que el marco legal permite que Petroecuador contrate coberturas, una decisión sensata, puesto que, desde un enfoque macroeconómico, se trata de asegurar ingresos mínimos y proteger la estabilidad estatal. Pero asegurar el precio no basta: hace falta reconstruir el tejido social asegurando una base más sólida. En 2024, las remesas alcanzaron un récord de USD 6 539,8 millones, equivalente al 5,3 % del PIB, con un incremento interanual del 20,1 %, por ello siguen siendo un salvavidas anónimo para muchas familias, sin embargo, son variables, no política sostenible, más aún a las puertas de un conflicto global.

El desafío es ético y técnico a la vez. Sería señal de madurez institucional que Ecuador logre una *mise en œuvre* coherente de instrumentos fiscales y financieros que le permitan transitar de la dependencia al equilibrio. Releer sus errores, como quien vuelve sobre un capítulo que no comprendió del todo, puede evitarle repetirlos. Porque el verdadero progreso no está en los picos del precio del crudo, sino en la racionalidad de las decisiones que se toman con él. No se trata de renunciar al petróleo, sino de dejar de vivir para él. Y eso, más que una estrategia económica, es (o debería ser) un acto de responsabilidad con el futuro.

Autoría:

Mg. Ec. Amanda Hidalgo Ph.D(c).
Investigadora ICPI